

El dogma economicista

Manuel Peinado Lorca

Resulta preocupante constatar cómo cada vez más los gobiernos pierden su capacidad de iniciativa y ceden la soberanía política, que únicamente detentan por cesión popular, a las denominadas fuerzas del mercado. Se corre con ello el peligro de convertir a los Estados modernos en gigantescas empresas obsesionadas por el rendimiento económico, inmersas en una lucha global por la competitividad -la denominada mundialización de la economía- y olvidadas de que el objetivo de la sociedad no debe ser producir dividendos sino solidaridad y humanidad.

Cada vez más se separa el político de la generación de ideas, de la defensa de los valores democráticos y de la capacidad de ilusionar a la sociedad aun exigiéndole sacrificios, para convertirse en un seductor, sí, pero en un seductor puesto al servicio del nuevo dogma economicista. Antaño de forma imperceptible, ahora con mayor claridad, comienza a hacerse visible que algunos pretenden que la capacidad de decisión política se transfiera desde aquellos que la ejercen en virtud del contrato social democráticamente suscrito, a las fuerzas que pretenden ejercerla en nombre del mercado. El poder de los bancos centrales y de los mercados financieros sobre los gobiernos es cada vez mayor, lo que trae como consecuencia la implantación del imperio del economicismo de gabinete, ajeno a las exigencias políticas y sociales.

La deidad es el mercado y, en su nombre, el dogma indica que hay que reducir el déficit público. Justo lo contrario de hace algunos años, lo que no debe extrañar dada la reconocida capacidad de la Economía para explicar lo sucedido, sólo comparable con su inanidad a la hora de diseñar acertadamente el porvenir. No debe así sorprendernos que los mismos sacerdotes del dogma -o sus herederos generacionales- que antes consideraban el déficit público como una bendición, proclamen ahora justamente lo inverso, amenazando con todo tipo de calamidades de no contenerse el mismo.

El primer objetivo de los nuevos profetas del recorte del gasto es el estado del bienestar, y no para modificarlo, sino para recortarlo. Se trata de un torpedo dirigido directamente a la línea de flotación que ha sostenido a Europa desde la postguerra y que ha logrado un nivel de prestaciones sanitarias, educacionales y de pensiones a las que el conjunto de la población no está dispuesta a renunciar.

Desde la perspectiva de la izquierda parece necesario recalcar la importancia y la oportunidad de la política frente a otras actividades públicas sin duda tan respetables como la planificación económica, pero sin sobrevalorarlas, situándolas en su justo término, y siempre desde la consideración de que el Estado de bienestar es un logro que habrá que modificar en su financiación, pero no aceptando recortes inmediatos sino profundizando en sus mejoras y abriendo un amplio debate social y un consenso político a todos los niveles. Las leyes del mercado pasarán, pero al mundo lo seguirán moviendo los viejos ideales de igualdad, justicia y solidaridad. Aun dentro de sus imperfecciones, los logros del Estado de bienestar son un camino ya recorrido e irreversible hacia la transformación del viejo orden establecido.

Los dos modelos que se plantean como opciones a imitar son Estados Unidos y los países del Este asiático. En el primer caso, se acusa a Europa de tener demasiadas prestaciones de desempleo, elevados costes laborales y un despido demasiado caro. Como en Estados Unidos las condiciones son justamente las contrarias y, sin embargo, se genera empleo, el dogma dice que -invirtiendo las condiciones europeas- empezaremos a reducir nuestros niveles de paro. Se olvidan de dos pequeños detalles: a) la enorme capacidad de los recursos norteamericanos, fundamento del inmenso poder de su economía; b) el nivel de empleo en Estados Unidos es indudablemente alto, pero basta conocer con alguna profundidad el país para percartarse -una vez superado el deslumbramiento inicial- de las condiciones de precariedad en que se encuentran muchos trabajadores.

Segundo paraíso del dogma: los países asiáticos y su enorme crecimiento económico. Como hay que competir con productos bien elaborados y mucho más baratos, es necesario hacer los nuestros más competitivos. De acuerdo, pero en lugar de bajar los costes sociales de la producción europea, porqué no se aumenta la presión internacional sobre los países que, con absoluto desprecio de los derechos sociales de los trabajadores, producen bueno, bonito y barato con sangre, sudor y lágrimas. ¿No sería hora de plantearse desde el gigantesco mercado de insumos europeo un a suerte de proteccionismo que vetara la entrada de productos de países que no tuvieran un nivel de prestaciones sociales mínimamente aceptables?

Diario de Alcalá, 6 de febrero de 1996